



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)**

**Demandante:** ANA MERCEDES JIMÉNEZ MORALES  
**Demandados:** AFP PROTECCIÓN S.A.  
**Radicado:** 05001 31 05 002 2022 00457 01  
**Sentencia:** S-043

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación interpuesto por la parte demandante** en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el día 25 de octubre de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

ANA MERCEDES JIMÉNEZ MORALES demandó a PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se DECLARE el incumplimiento del Fondo de Pensiones al

deber legal y profesional de brindar información en los términos, condiciones y oportunidad establecidas por la ley, por lo cual debe responder de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados, derivados de la omisión al deber de información.

Como consecuencia, solicita se CONDENE a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, como el lucro cesante consolidado; el lucro cesante futuro hasta la vida probable y de manera subsidiaria el lucro cesante futuro de manera vitalicia y transmisible a los beneficiarios; perjuicio moral y pérdida de la oportunidad al perder la posibilidad de seleccionar de manera verdaderamente informada el régimen que más le beneficiaba, los intereses legales sobre la indemnización de los perjuicios causados, la actualización de la moneda y las costas procesales.

## **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que inició sus aportes al Régimen de Prima Media cotizando un total de 1.034,71 semanas; que realizó su traslado a PROTECCIONES S.A. en el mes de octubre de 2002 y allí cotizó 634,43 semanas, reuniendo en total 1.669,14 semanas; que PROTECCIÓN S.A. incumplió el deber legal y profesional al no brindar información frente a las características, condiciones de acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales vigentes para la fecha de traslado, como tampoco un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los sistemas pensionales vigentes. Que al momento en que elevó la solicitud pensional no se le explicó de manera detallada y clara cuáles eran las características de esta modalidad pensional, así como tampoco se le presentaron los riesgos que podría correr en caso de acogerse a esta modalidad pensional; que no se le informó de la prohibición legal; que se le reconoció la mesada pensional en cuantía de \$781.242, desconociendo que su mesada podía ser más favorable, en tanto podría corresponder en el RPM a una mesada por valor de \$1'934.013; que en

razón a la disminución tan gravosa que tuvo que soportar en sus ingresos al recibir la pensión de vejez reconocida por parte del fondo privado, ha experimentado aflicción, congoja, desasosiego y una profunda tristeza. Que el 14 de junio de 2022 elevó derecho de petición a PROTECCIÓN S.A. a fin de solicitar la indemnización de los perjuicios irrogados, junto con la copia de los correspondientes formularios de afiliación y certificado de pensión, sin recibir respuesta, reiterándola nuevamente el 9 de agosto de 2022, la cual fue contestada.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, PROTECCIÓN S.A. indicó que son ciertas las semanas cotizadas por la demandante, pero no es cierto que no se le haya dado una correcta información a la demandante, toda vez que desde que se afilió fue asesorada explicándole las características del RAIS y del RPM, las diferencias entre ambos, la forma de adquirir una pensión en uno y otro, las consecuencias del traslado y todos los aspectos necesarios para que pudiera tener claridad respecto a su panorama pensional, esto con el fin de que tomara libremente la decisión de vincularse o no a este régimen, pero no de manera impuesta como lo pretende hacer ver la demandante, sino voluntariamente, tal como sucedió en el presente caso. Insiste en que sí se le explicaron las diferencias entre ambos regímenes; que la actora es pensionada por vejez desde el 19 de julio de 2018 ejerciendo libremente su derecho a la libre selección de régimen pensional, disfrutando de las prerrogativas del RAIS hace 4 años, y que nunca se recibió una solicitud de perjuicios. Se opuso a todas las pretensiones. Como excepciones propuso inexistencia de las obligaciones demandadas y falta de causa para pedir, buena fe, pago, compensación, prescripción, prescripción de la pretensión de perjuicios, culpa del demandante, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones y falta del juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal.

## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 25 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** próspera la excepción de prescripción, toda vez que contabilizando desde la fecha que se recibió la pensión de vejez, esto es, 1º de junio de 2018, solo se interrumpió la prescripción el 14 de junio de 2022, transcurriendo más de 3 años para solicitar los perjuicios; en consecuencia, **ABSOLVIÓ** a PROTECCIÓN S.A. de todas y cada una de las pretensiones en su contra incoadas por la demandante; y **CONDENÓ** en costas a la parte actora.

## RECURSO DE APELACIÓN

Interpuesto por el apoderado de la parte actora, manifestando que es claro que la prescripción es una figura de orden público que permite responder a la necesidad de no mantener pendientes relaciones jurídicas de manera indefinida y que es una figura que se presenta como un castigo a quien no ejerce el derecho de manera oportuna, no obstante, se busca la reparación de perjuicios a cargo de las administradoras de pensiones por la omisión en el deber de información, y se debe tener en cuenta que la prescripción se puede dar siempre que dentro del proceso se pueda probar que la parte actora concurre al reconocimiento de la pensión debidamente informada, porque si se parte del hecho de que el motor de estos procesos es una omisión, esta no desaparece por el reconocimiento de la prestación, debiéndose establecer que la omisión en que incurrió la demandada estuvo presente durante todo el tratamiento de la relación precontractual y contractual, como es la construcción del derecho pensional e incluso desde el reconocimiento de la pensión que se deriva de los aportes realizados.

Que en el debate probatorio se estableció que la parte actora incurrió en una omisión previo al momento de la afiliación, y esa omisión inicial no fue subsanada en ningún momento en la construcción del derecho

pensional, ni antes de que la demandante se encontrara inmersa en la prohibición legal de regreso al RPM, y tampoco probó que durante el trámite del reconocimiento de la prestación económica la omisión de la información se hubiese superado o subsanado, brindándole información clara, amplia, comparada y los demás elementos.

Que si solo se tiene la fecha en que la actora accedió a reclamar el reconocimiento del derecho pensional, debe advertirse que no se tenía conocimiento de la magnitud del daño adquirido, y además la accionada siempre guardó silencio y se mantuvo en una actuar omisivo.

Que el daño por definición es la lesión que se le causa a un interés legítimo y este puede estar representado en un derecho pecuniario o no pecuniario, pero el derecho a la pensión es un derecho, no es daño en sí mismo, no se puede partir del hecho de que una persona concurra a solicitar la pensión porque cumple los requisitos que se le exigen y la persona sabía que concurría a la comisión de su propio daño, cuando la única parte que conocía las condiciones que ese derecho estaba siendo reconocido y que tras ese derecho había la comisión de un perjuicio es la accionada.

Y que en estos procesos no se puede simplemente asumir que, para hacer el conteo de la prescripción, sea desde el momento en que la persona acude a solicitar la pensión, y que ahí ya sabía que le sobrevenía un daño, ya que la actora no conocía que le sería más favorable obtener una pensión en el RPM, pues el que tiene el deber de obligación de brindarle información de que existían diferencia en el monto y forma de liquidar la pensión era el fondo privado, el cual guardó silencio.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La demandante en sus alegatos insiste en que debe revocarse la sentencia, ya que el daño se encuentra plenamente probado, pues la

lesión definitiva del derecho recae en la imposibilidad de seleccionar de manera libre, voluntaria y verdaderamente informada el régimen pensional al que deseaba pertenecer y en el que eventualmente obtendría el reconocimiento de su pensión; que el daño generó perjuicios de carácter material e inmaterial, ya que ella tenía altas probabilidades de haber evitado el daño sufrido, y que la accionada no allegó prueba que controvirtiera los perjuicios alegados en la demanda; que si se probó la culpa, ya que la accionada incumplió el deber de información; que la prescripción de la acción sería correcta, siempre y cuando la parte actora concurreniera al reconocimiento de su pensión debidamente informada, lo cual nunca sucedió ni en la etapa precontractual ni contractual; y que es posible afirmar que la demandante no tuvo conocimiento de la existencia del daño el día en el que le fue reconocida la pensión, o por lo menos no se probó, teniendo conocimiento con posterioridad.

### **C O N S I D E R A C I O N E S:**

El meollo del presente asunto, radica en dilucidar si procede o no la indemnización de perjuicios reclamada por la señora ANA MERCEDES JIMÉNEZ MORALES, originados en el incumplimiento del deber de información por parte de PROTECCIÓN S.A. al momento de producirse su traslado de régimen pensional, lo que le condujo a percibir una mesada pensional inferior a la que le habría correspondido en el Régimen de Prima Media administrado por COLPENSIONES.

Así las cosas, procura el pago de la suma de \$1.094'551.945 por concepto de perjuicios patrimoniales (lucro cesante consolidado y futuro), además de los perjuicios morales y la pérdida de oportunidad al perder la posibilidad de seleccionar de manera verdaderamente informada el régimen que le beneficiaba, más los intereses legales sobre la indemnización de los perjuicios causados y la actualización de las condenas.

Pretensión frente a la cual el Juzgado de primera instancia declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la opositora, con fundamento en que no adelantó reclamación, ni interpuso la demanda, dentro de los 3 años posteriores a la fecha en que obtuvo la pensión de vejez.

Para comenzar a resolver el problema jurídico presentado por la parte actora, es necesario inicialmente hacer mención de la figura de la ineficacia del traslado, en donde existe un incumplimiento del deber legal de información integral, y debe partirse de allí, debido a que esta falta de asesoramiento completo y detallado se mira con respecto a un afiliado cuya situación no ha mutado al nuevo estatus de pensionado, pues este último tránsito supone - en el caso de los fondos privados cuando el interesado opta por una determinada modalidad pensional (situación que ocurre en el presente caso<sup>1</sup>)- la celebración de un nuevo acto jurídico subjetivo, diverso del primero, cuyos efectos sobrevinientes no deben verse afectados por la presunta ilegitimidad del acto primigenio, jurídicamente independiente de este último. El afiliado ha franqueado la línea que la separa de estatus, convirtiéndose en pensionado, lo que lo sitúa en la categoría de beneficiario de un derecho adquirido bajo las normas que rigen su nueva condición, sin que en este caso pueda aducirse - ni se alega en este evento - una nueva ineficacia de la solicitud de pensionamiento.

En sentencia unificada dictada por la Sala Especializada Laboral de este Tribunal el día 14 de agosto del año 2019<sup>2</sup>, por mayoría de sus integrantes se aprobó la decisión, relacionada íntimamente con el caso que ahora concentra la atención de esta Sala de Decisión, en el sentido de deslindar las 2 categorías anteriores. Así, luego de enunciar la evolución jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte

---

<sup>1</sup> Documentos diligenciados y firmados para adquirir el derecho por parte de la actora – folios 82 a 85 y 91 a 104 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

<sup>2</sup>LUIS ALFONSO GALVIS TORRES contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS; la ACP COLPENSIONES y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., RUN 05001-31-05-007-2015-01295-01. M. P. Dr. ORLANDO GALLO ISAZA

Suprema de Justicia sobre el tema de la ineficacia del traslado de régimen en general, especialmente en el sentido de que el juez debe, ciertamente, constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico, y bien, que le incumbe a las AFP del RAIS por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró a la afiliada la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, se señaló en el fallo que se cita lo siguiente<sup>3</sup>:

*"Este universo fáctico descrito por la Corte no incluye a los pensionados, pues aunque una de las sentencias fundadoras de esta línea trató de un pensionado que se trasladó a PORVENIR, se trata de un caso disanalógico, no inscrito en el precedente, por cuanto se trataba de una persona expresamente excluida del régimen de ahorro individual, al tener más de 55 años a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estando inmerso en el contenido del ordinal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.*

*(...)*

*Viene a colación la referencia al consecuencialismo, porque resultaría posible darle continuidad a lo razonado por la Sala Laboral de la Corte para declarar la ineficacia de los traslados al RAIS en el caso de los afiliados y hacerlo extensivo a quienes ya se han pensionado en los fondos privados. Probablemente necesitaría un menor esfuerzo argumentativo plegarse a las razones de nuestro tribunal de cierre y seguir fallando en cascada idénticamente los casos de afiliados y de pensionados.*

*Pero las calidades de **afiliado y pensionado** ya han sido deslindadas por la Corte Constitucional, precisamente en un fallo con un claro enfoque consecuencialista. Al examinar la*

---

<sup>3</sup> Advirtiendo que tal sentencia se dictó con sujeción al art. 35 del CGP, según el cual: "A solicitud del magistrado sustanciador, la Sala plena especializada o única podrá decidir los Recursos de Apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial". Norma que se entiende en concordancia con el art.10 inciso final del Acuerdo N° PCSJA17-10715, por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los T.S. del Distrito Judicial. Lo anterior para significar que no es posible a las Salas de Decisión, separarse de dicho antecedente.



exequibilidad del art. 107 de la Ley 100/93, que limitaba la posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras, la Corte arguyó lo que se esbozará enseguida. Esta es la disposición:

Art. 107. CAMBIO DE PLAN DE CAPITALIZACIÓN O DE PENSIONES Y DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.

El Tribunal constitucional profirió la sentencia C-841 de 2003, en la cual abordó dos problemas jurídicos, a saber:

1. ¿Es contrario al principio de igualdad que se permita a los afiliados, pero no a los pensionados, trasladarse entre administradoras de pensiones?
2. ¿Vulnera el derecho a la seguridad social de los pensionados que se les impida escoger la entidad administradora de pensiones o plan de capitalización que les resulte mejor administrativa o financieramente, siendo ya pensionados?

La Corte, ante la acusación de que la norma contenía un trato discriminatorio, realizó el correspondiente test de igualdad, entendiendo que:

“...la Constitución atribuyó al legislador la función de configurar el sistema de pensiones, y le otorgó un margen amplio para hacerlo, a fin de garantizar que el sistema cuente con los “medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,” y su prestación se haga de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta.”

Encontró además que los fines perseguidos por el legislador eran legítimos e importantes, en tanto,

“Tal como se señaló anteriormente, el art. 107 de la Ley 100/93 busca alcanzar al menos 2 fines claramente identificables: (i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii) asegurar la estabilidad financiera y la

rentabilidad de las inversiones de la entidad administradora o aseguradora.

Estos dos fines están estrechamente ligados a los fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad que orientan la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general, y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.

Halló también que el medio elegido por el legislador resultaba idóneo para el logro de los fines perseguidos, pues,

“Permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado.

La pregunta que lógicamente ha de plantearse este Tribunal es si la prohibición de movilidad para pensionados que el legislador estableció y la Corte Constitucional prohijó, en el caso citado para trasegar dentro del régimen de ahorro individual, no tendrá aún mayor entidad para los asuntos como en el de la ineficacia, donde la orden que finalmente contienen nuestras sentencias es la de inscribir al demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Esto es, mutar su régimen pensional.

La prohibición de traslado para quienes les faltaren menos de 10 años para pensionarse, introducida en la ley 100 por el art. 2º de la Ley 797/03, también fue avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 de 2004, con consideraciones que si bien se referían a una norma posterior, reafirman la pertinencia de esas limitaciones a la movilidad entre regímenes. Como en el caso de la C-841 de 2003, la norma aquí demandada también superó el test de proporcionalidad y

abundaron en ella motivaciones claramente consecuencialistas. Este párrafo abunda en estas últimas:

*“Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en: “obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social. Este principio en materia pensional se manifiesta en el logro de la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar ‘el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’, en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior”*

(...)

*Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los arts. 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100/93, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.*

(...)

*Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha*

*contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum :*

*“(…)*

*Valga también mencionar además las situaciones de quienes se han pensionado anticipadamente y han negociado su bono pensional antes de la fecha de redención normal. Ese tercero inversionista que se ha beneficiado en el mercado de valores, mediante un negocio totalmente legítimo, querrá una respuesta cuando la justicia laboral disponga la anulación de esa transacción.*

*Estos sería solo dos ejemplos del impacto que en el mundo real tendría declarar la ineficacia de la afiliación de quienes ya se han pensionado en el régimen de ahorro individual. Impacto que responsablemente esta Sala quiere evitar, decidiendo mediante esta sentencia de unificación que no podrá declararse la ineficacia ni la nulidad de su afiliación.”*

**Criterio que igualmente asumió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como se puede ver en las sentencias SL 373-2021, SL 3707-2021, SL 1113-2021 o la SL 2176-2022 en las que indicó:**

*“... si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante)<sup>4</sup>, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.*

---

<sup>4</sup> SL1688-2019, SL3464-2019

*(...) de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado."*

Conforme a lo anterior, no puede pasarse por alto que la condición de la demandante es la de pensionada del RAIS, y desde esta perspectiva deben abordarse los perjuicios solicitados. En este sentido, esta Sala de Decisión ha considerado que la indemnización de perjuicios en casos como el presente, es decir, fundada en una inadecuada asesoría al afiliado por parte de los promotores de un Fondo privado para lograr el traslado al régimen que estos administran, no es cosa de poca monta, de suerte que la demanda que tal cosa persiga, debe construirse con el suficiente soporte fáctico, jurídico y probatorio, es decir, al menos, indicando con claridad y precisión los hechos en que se basan las pretensiones, cuáles son los fundamentos jurídicos que las sustentan y qué pruebas hará valer.

En el caso bajo examen, no desconoce la Sala que juiciosamente la parte actora efectuó una cuantificación de los perjuicios que, según su estimación, deben ser reconocidos por el fondo privado, sin embargo, es necesario dejar en claro que el presupuesto de la pretensión indemnizatoria que presenta la parte demandante recae en una responsabilidad endilgada a una administradora de pensiones (PROTECCIÓN S.A. en este caso) y, en ese orden de ideas, la naturaleza del derecho **no es pensional sino resarcitorio**, dado que se busca la **reparación de un daño ocasionado con una conducta jurídica**, aspecto claramente delimitado en la sentencia SL373-2021, en la que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia expresó lo siguiente:

*"Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un*

*perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora.”*

Esto es, tratándose de la reparación de un daño, la acción que se sigue es la indemnizatoria de perjuicios, y para efectos de la prescripción, el momento crucial para la exigibilidad del derecho - contrario a lo manifestado por la parte actora - es aquel a partir del cual se tiene la **condición de pensionado**, pues como lo afirmó la propia Corte en la sentencia que se viene de citar “...el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento.”

Así las cosas, siguiendo estas enseñanzas, resulta evidente que en el caso de autos la prescripción que establece el artículo 151 del CPT y la SS., efectivamente sí operó, tal como lo señaló el juez, toda vez que el reconocimiento del derecho pensional a la par del valor de la mesada fue concedido por PROTECCIÓN S.A. a la demandante desde el **1º de junio de 2018**<sup>5</sup> en la modalidad de garantía de pensión mínima, y dentro de los 3 años siguientes a esta fecha aquella no promovió ninguna acción tendiente al reconocimiento del perjuicio, pues solo se elevó solicitud para interrumpir la prescripción el **14 de junio de 2022**<sup>6</sup>, y presentó la demanda el **30 de septiembre de 2022**, conforme se observa en el acta individual de reparto de la oficina judicial de Medellín.

Así las cosas y sin más consideraciones, se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia.

Costas de la segunda instancia a cargo de la demandante, por no salir avante el recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se fijan en la suma de \$650.000.

---

<sup>5</sup> Folios 105 a 107 de la contestación de Protección S.A.

<sup>6</sup> Folios 110 a 112 de la demanda

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**CONFIRMA** la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el día 25 de octubre de 2023.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f653fd665927ed677016f41a4437040f7957be4a9c306ca6bcf30ad619ad9962**

Documento generado en 12/03/2024 11:47:56 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>